



Asamblea General

Distr. general
12 de noviembre de 1997
Español
Original: inglés

Quincuagésimo segundo período de sesiones
Tema 112 c) del programa

Cuestiones relativas a los derechos humanos: situaciones relativas a los derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales

Nota del Secretario General

Adición

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General la adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Operación de Derechos Humanos en Rwanda, preparado en cumplimiento de la resolución 51/114 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1996.

Anexo

Adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Operación de Derechos Humanos en Rwanda

I. Introducción

1. Como se indica en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Operación de Derechos Humanos en Rwanda, presentado a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones (A/52/486), ha sido necesario que un experto realice una evaluación de la labor de la Operación, en consulta con el Gobierno de Rwanda, a fin de trazar su trayectoria futura. Por consiguiente, el Alto Comisionado pidió a Ian Martin, Jefe de la Operación desde octubre de 1995 hasta septiembre de 1996, que visitara Rwanda del 6 al 11 de octubre de 1997 con el cometido de evaluar el papel de la Operación en la situación actual de los derechos humanos en Rwanda y de formular recomendaciones sobre la pertinencia de su mandato, teniendo en cuenta las opiniones del Gobierno de Rwanda y las condiciones de seguridad prevalecientes. Durante su misión, el Sr. Martin se reunió con el Presidente, el Vicepresidente y otros altos funcionarios del Gobierno de Rwanda; con organismos asociados, incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como con representantes de los gobiernos que aportan fondos a la Operación de Derechos Humanos en Rwanda. En la presente adición al informe del Alto Comisionado se incluyen las conclusiones y recomendaciones de la misión de evaluación del Sr. Martin, que aún se están estudiando. El 27 de octubre de 1997 se celebró una consulta oficiosa a la que se invitó a los socios interesados de las Naciones Unidas que cooperan actualmente en la Operación de Derechos Humanos en Rwanda. El Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios también examinará el informe de evaluación en relación con la necesidad de que los organismos de las Naciones Unidas adopten un enfoque más integrado, tal como se acordó en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el 30 de octubre de 1997.

II. Conclusiones de la misión de evaluación

2. En el informe del Alto Comisionado a la Asamblea General¹ se describe la situación de seguridad y de derechos humanos desde el regreso en masa de rwandeses procedentes de la República Democrática del Congo (antiguamente conocida como el Zaire) y la República Unida de Tanzania a finales de 1996. La Operación de Derechos Humanos en Rwanda contribuye a proteger y promover los derechos humanos a raíz del genocidio de 1994, y en el marco de las actividades de los rebeldes y las tropas enviadas a combatirlos. Las circunstancias difíciles y peligrosas en que la Operación de Derechos Humanos desempeña su mandato han costado la vida a siete miembros de su personal. La Operación de Derechos Humanos sigue empeñada en restablecer su presencia en las prefecturas y municipios, en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan. A principios de octubre de 1997, se reabrió una suboficina en Cyangugu. Aunque un equipo móvil se estaba preparando para instalarse en Gisenyi, los planes se pospusieron debido a la intensificación de los combates en la zona.

3. Esta situación en materia de seguridad plantea a la Operación un problema que es la consecuencia reciente del establecimiento de operaciones de derechos humanos sobre el terreno en países que experimentan graves conflictos armados internos. La labor de vigilancia de los derechos humanos ha ganado experiencia con respecto a las violaciones cometidas en un contexto de conflictos políticos y represión, pero relativa seguridad; su finalidad no es supervisar las violaciones de las normas internacionales humanitarias perpetradas durante conflictos armados declarados. Inevitablemente, los observadores de derechos humanos tienen menos acceso a los lugares en que los conflictos son más intensos. Ahora bien, una presencia de derechos humanos no puede tratar de contener gestiones para investigar la credibilidad de informes provenientes de las zonas de conflicto relacionados con denuncias de asesinatos deliberados de civiles que, de confirmarse, constituirían violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

4. El cometido de la Operación de investigar, discutir con el Gobierno de Rwanda y, posteriormente, informar sobre los

asesinatos de civiles por parte del Ejército Patriótico de Rwanda (EPR) durante las actividades encaminadas a combatir a los rebeldes, ha provocado tirantez en sus relaciones con el Gobierno. En mayo/junio de 1997, tras la retirada de los equipos móviles de la región occidental y la imposición de restricciones de seguridad a las Naciones Unidas, que cortaron el acceso a las zonas en conflicto, la Operación recibió informes sobre asesinatos en gran escala de civiles por parte del Ejército Patriótico de Rwanda en la prefectura de Ruhengeri, como se menciona en el párrafo 52 del informe del Alto Comisionado. Esos informes se investigaron desde Kigali, sin acceso a las zonas en que presuntamente se produjeron los asesinatos. La Operación tuvo acceso directo a fuentes directas y fidedignas, las evaluó de manera responsable, e hizo grandes esfuerzos por analizarlas con el Gobierno antes y después de preparar un informe confidencial por escrito al Ministerio de Defensa. Así y todo, es menester reconocer las limitaciones que existen, en las actuales circunstancias, para verificar las denuncias de estos incidentes o las estimaciones del número de personas asesinadas con precisión suficiente. Recae sobre el Gobierno la responsabilidad de asegurar que se investiguen esos incidentes hasta la saciedad.

5. Desde finales de 1995, la Operación ha enviado un informe exhaustivo, que abarca un período de uno o dos meses, a los ministerios gubernamentales más pertinentes, poco antes de presentarlos a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas en Ginebra. La Operación también presenta informes confidenciales sobre incidentes particulares y la pauta que suelen seguir los incidentes o los problemas, y procura que se analicen antes de su publicación como “informes provisionales”. Algunas de las investigaciones de incidentes sobre los que la Operación había presentado informes fueron emprendidas por el Fiscal Militar a mediados de 1996, en estrecha cooperación con la Operación, aunque todo parece indicar que no llegaron a concluir, en parte debido probablemente a los muy limitados recursos para investigación y seguimiento de que disponía la Oficina del Fiscal Militar hasta que en abril de 1997 se la dotó de más personal bajo la dirección de un oficial de alto rango. Ni la Operación ni el Gobierno consideran que se ha mantenido un diálogo efectivo; además, la falta de continuidad a nivel del Jefe de la Operación ha sido un impedimento en ese sentido. El mandato de la Operación ha hecho siempre igual hincapié en la labor de vigilancia y en la de cooperación técnica, por lo que se ha tratado de lograr una relación mutua entre ambas. Cuando en febrero de 1997, debido a la retirada, se interrumpieron las actividades de vigilancia, actividades que posteriormente se reanudaron sólo lenta y parcialmente, en la reestructuración y reasignación de personal se prestó

mayor atención a apoyar al sistema judicial y a la promoción general de los derechos humanos. Desde entonces se ha llevado a cabo una valiosa labor de capacitación, muy en particular con el Ejército Patriótico de Rwanda, la gendarmería y la policía municipal; con los oficiales de los sistemas de justicia militar y civil; y con los miembros de la Asamblea Nacional de Transición. La Operación también ha cooperado cada vez más estrechamente con las organizaciones no gubernamentales de Rwanda. Con todo, el Gobierno parece considerar que la Operación de Derechos Humanos sigue interesándose más por la vigilancia que por el fortalecimiento institucional, que la Operación no ha reanudado suficientemente su labor de vigilancia y que ha asignado demasiado personal a las actividades de promoción.

6. Algunos funcionarios del Gobierno expresaron su preocupación por el hecho de que, a su juicio, los informes de la Operación no estuviesen debidamente verificados y que, a pesar de encontrarse en el lugar de los hechos, la Operación no confirmara las denuncias antes de hacerlas públicas. Se quejaron también de que se estaba descuidando el objetivo de vigilar la situación de los derechos humanos con miras a ayudar a Rwanda a avanzar en la esfera de los derechos humanos. A este respecto, recordaron que originalmente la intención del Gobierno fue solicitar la presencia de la Operación en territorio de Rwanda con el propósito de fomentar el sentimiento de cooperación y de ayudar a los rwandeses a desarrollar la capacidad de promover los derechos humanos, y no la de traer observadores para “vigilar” al Gobierno. El Gobierno tiene intención de establecer una comisión nacional de derechos humanos que, conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales rwandesas, asumirían la responsabilidad de vigilar y promover los derechos humanos. Algunos funcionarios gubernamentales expresaron su satisfacción con diversos aspectos del trabajo de la Operación, como el suministro de información al Ministerio de Justicia y su cooperación con la Oficina del Fiscal Militar General.

7. La mayoría de los representantes de los gobiernos que han tomado la iniciativa de contribuir a la financiación de la Operación y siguen de cerca su labor, opinaron que dada la situación de los derechos humanos en Rwanda era preciso restablecer y mantener, en la mayor medida posible, la presencia local de la Operación y la labor de vigilancia conforme a las normas de seguridad de las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que sigue igualmente sujeta a las normas de seguridad de las Naciones Unidas, y cuyas actividades de vigilancia con respecto a la situación de los repatriados se ven también obstaculizadas, expresó la esperanza de que la Operación pudiera volver a realizar visitas más detenidas a

los centros de detención locales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que se basa en evaluaciones de seguridad independientes de las de las Naciones Unidas, y cuyos delegados no viajan con escoltas armados, actualmente visita la mayoría, aunque no todos, los centros de detención locales.

III. Recomendaciones

8. La función de la Operación de Derechos Humanos debe seguir combinando la presencia y la vigilancia locales de carácter disuasivo con la cooperación técnica y el fomento de la capacidad. La vigilancia debe concebirse como un medio de ayudar al Gobierno a hacer frente a los problemas, como una base para entablar un diálogo con el fin de determinar las necesidades, y como un incentivo para que la comunidad internacional preste la ayuda necesaria con ese fin. El fomento de la capacidad y la enseñanza y la promoción de los derechos humanos deben guardar una relación clara con este diagnóstico.

9. Se debería analizar la posibilidad de sustituir los informes bimensuales de la Operación, cuyo carácter semipúblico ha creado cierta ambigüedad y dejado que desear, por informes que el Alto Comisionado presentaría a la Comisión de Derechos Humanos y que se publicarían como documentos oficiales de las Naciones Unidas. Este informe podría ser más analítico que los informes actuales y redactarse de manera que proporcionase un contexto apropiado de la situación; además debería contener recomendaciones y vincular el análisis de la situación de derechos humanos y las recomendaciones con la cooperación en materia de fomento de la capacidad que la Operación mantiene con las instituciones rwandesas. Se debería enviar al Gobierno con anticipación cada proyecto de informe para que constituya la base de un diálogo que quedaría recogido en el informe publicado. La Operación debería seguir publicando oportunamente informes sobre la situación relativos a incidentes de importancia que deberían seguir siendo objeto de análisis previo con el Gobierno.

10. En los informes de la Operación se deben reconocer explícitamente las dificultades especiales que entraña tener que investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la situación de conflicto armado interno y de limitaciones en este aspecto que prevalece en Rwanda. La Operación debe seguir investigando hasta donde sea posible los informes de tales violaciones, incluidos los que provienen de zonas a las que no pueda tener acceso de conformidad con las normas de seguridad de las Naciones Unidas. Debe hacerse todo lo posible por entrevistar a los jefes militares durante estas investigaciones.

11. Es menester mejorar la credibilidad de la función de fomento de la capacidad y promoción de la Operación de Derechos Humanos dando mayor reconocimiento a la labor que la Operación de Derechos Humanos ha estado realizando efectivamente, en particular definiendo claramente la relación entre el diagnóstico de los factores que provocan las violaciones de los derechos humanos y las prioridades en materia de fomento de la capacidad y promoción, y concretando mejor los objetivos. Como indicó el Alto Comisionado en su informe a la Asamblea General¹, la Operación de Derechos Humanos ha preparado un programa sustancial de actividades en materia de cooperación técnica que estaría en condiciones de llevar a cabo y en el que se reflejan las extensas consultas con los socios rwandeses. En nuevas conversaciones con el Gobierno, la Operación de Derechos Humanos debería seleccionar un conjunto estratégico de objetivos en materia de fomento de la capacidad. Se han previsto nuevas conversaciones con el PNUD sobre la cooperación en estos proyectos.

12. El programa de cooperación técnica incluye la capacitación y el apoyo al sistema de justicia militar, elemento al que se debe asignar gran prioridad. El programa también incluye apoyo a la comisión nacional de derechos humanos independiente que el Gobierno tiene intención de crear. Es sumamente importante que la legislación necesaria que actualmente se prepara en el Ministerio de Justicia refleje la mejor práctica internacional. De hecho, esta preocupación compete al mandato del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, quien actualmente lleva a cabo consultas sobre esta cuestión con el Asesor Especial del Alto Comisionado sobre Instituciones Nacionales.

13. La Operación de Derechos Humanos debe examinar con carácter prioritario de qué manera se podría desarrollar su actual colaboración con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos rwandesas a fin de incrementar su capacidad independiente de protección y promoción de los derechos humanos. En este sentido, podría ser útil tratar de obtener la participación de una organización no gubernamental con experiencia en el fortalecimiento institucional en otros países de África.

14. La programación de la tarea de promoción de los derechos humanos de la Operación de Derechos Humanos ha adolecido de falta de objetivos concretos y no siempre ha tomado en consideración la información y el análisis relativos a la situación de los derechos humanos en el país. Esta tarea debe vincularse mejor a ciertas cuestiones de alta prioridad observadas en otros aspectos de las funciones de la Operación de Derechos Humanos, en particular la administración de justicia y la vigilancia de los derechos humanos. Entre estas cuestiones figurarían las garantías de juicio imparcial, la independencia del poder judicial y otros miembros de la

profesión jurídica, el respeto de los procedimientos legales de detención y encarcelamiento, salvaguardias del derecho a la vida y a la integridad física, y el acceso de la población a medios de defensa efectivos en los casos de violaciones de derechos humanos.

15. Las decisiones relativas a la futura dotación de personal y estructura dependerán de las prioridades que se establezcan en relación con la función futura de la Operación de Derechos Humanos. En la actualidad los equipos móviles no cuentan con el personal necesario, y habría que reforzar inmediatamente estos equipos. Recientemente se decidió aumentar hasta 27 el número de oficiales asignados a los equipos móviles. La cifra total de estos oficiales dependerá no sólo de las condiciones de seguridad sino también del resultado de las conversaciones con el Gobierno sobre la continuación de la función de vigilancia y la presencia local.

16. La firmeza y la continuidad del Jefe de la Operación de Derechos Humanos sigue siendo un factor crucial para mantener un diálogo permanente con el Gobierno, y para garantizar una moral y una gestión excelentes en el plano interno. La dificultad y la delicadeza que entrañan la investigación y la preparación de informes en el contexto actual exigen conocimientos y experiencia de alto nivel. Por consiguiente, se debe incorporar personal con mayor experiencia profesional para apoyar los esfuerzos de la Operación de Derechos Humanos dirigidos a promover el fortalecimiento de la capacidad institucional y los derechos humanos.

17. Los responsables de la administración de la seguridad se enfrentan a una situación muy difícil debido a que las zonas de mayor conflicto cambian, el grado de riesgo puede extenderse a otras partes del país y la situación sigue siendo inestable. Estas condiciones exigen una evaluación continua y localizada. En la evaluación de la situación en materia de seguridad de las Naciones Unidas, realizada por el Coordinador de Medidas de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo de 1997, se recomendó que se contratara a un oficial de seguridad para el cuadro orgánico de cada oficina local propuesta antes de que se abrieran nuevamente esas oficinas fuera de Kigali. Ya se han designado oficiales de seguridad para las oficinas de Cyangugu y Gisenyi. Se debe otorgar la más alta prioridad a la necesidad de que la Operación de Derechos Humanos cuente con un equipo de seguridad numeroso, teniendo en cuenta que debe mantener su presencia tanto sobre el terreno como en Kigali, y para poder sustituir a sus miembros durante los permisos. El apoyo público del Gobierno a la función de la Operación de Derechos Humanos también es importante por lo que respecta a su seguridad.

18. La Operación de Derechos Humanos en Rwanda no sólo constituye la mayor presencia del Alto Comisionado sobre el

terreno sino que desempeña su misión en circunstancias particularmente difíciles y peligrosas en una relación delicada con un Gobierno a raíz de un genocidio. Cabe esperar que la continuación de las conversaciones con el Gobierno permita adoptar un punto de vista común en cuanto a la utilidad de la presencia local y la labor de vigilancia de la Operación de Derechos Humanos, mantener las modalidades convenidas para dialogar e informar sobre sus conclusiones y una función estratégica de fomento de la capacidad y promoción vinculadas inequívocamente con el análisis de la situación de los derechos humanos. Es menester que se asigne a la Operación de Derechos Humanos la máxima prioridad por lo que respecta a la firmeza de su dirección, al profesionalismo de su personal de derechos humanos, a sus disposiciones sobre seguridad, a los servicios prestados por la Oficina del Alto Comisionado, y a la estabilidad y previsibilidad de su financiación.

Notas

- ¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 36 (A/52/36).*